

---

## SEMANARIO JUDICIAL.

---

### AMPARO.

Juicio promovido por el C. Agustín Villa ante el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, por haberse violado en su persona el art. 4º de la Constitución federal.

#### PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito: El Promotor fiscal ha examinado el expediente instruido en ese Juzgado, con motivo del recurso de amparo intentado por el ciudadano Agustín Villa contra una providencia del ciudadano gobernador de este Estado, que le impide el ejercicio de su profesión de escribano. Pedido á aquel funcionario el informe de que habla la ley de 20 de Enero del año anterior, se negó á darlo, diciendo que no cree ser la autoridad inmediatamente ejecutora del acto reclamado; pero que para facilitar en cuanto sea posible la pronta administración de justicia, mandó sacar una copia autorizada del expediente instruido, á consecuencia de las dos solicitudes que en distintas fechas ha elevado ante él, el ciudadano Villa, para que se le permita ejercer su profesión, así como del dictámen de la comisión de justicia del II. Congreso del Estado, y de los acuerdos aprobados

por la misma Corporación. Estos documentos se registran de fojas 11 á la 16 del expediente.

El Promotor se propone en este dictámen examinar las siguientes cuestiones:

1ª ¿El ciudadano Agustín Villa es escribano público, legalmente apto para ejercer como tal?

2ª ¿Al impedirle el ejercicio de su profesión, se ha violado en él alguna de las garantías que le otorga la Constitución federal?

3ª ¿La determinación del ejecutivo del Estado que le impide dicho ejercicio, es legalmente fundada?

4ª En consecuencia, ¿procede ó no procede el recurso de amparo intentado por el ciudadano Villa?

Vengamos á la primera cuestión. Que el ciudadano Agustín Villa es escribano público, lo demuestra con la mas palpable evidencia el documento de fojas 3 del expediente, en que se ve que el mismo ciudadano gobernador del Estado, contra quien se intenta este juicio, dijo en diez y nueve de Junio del año anterior, que habiendo solicitado el ciudadano Agustín Villa el *fiat* de escribano público nacional, y en atención á que comprobó debidamente *tener la aptitud y conocimientos* que exigen las le-

yes, tuvo á bien acordar de conformidad: que portanto, manda á quienes corresponda, tengan por tal escribano público nacional al ciudadano Agustín Villa, quien en virtud de aquel *fiat*, puede ejercer libremente su profesion en el Estado, usando del signo del márgen en todos los documentos que autorice, y percibiendo los sueldos ó emolumentos que le estén señalados, etc.

Basta la simple lectura de este documento para convencerse de que el ciudadano Villa es un escribano legalmente autorizado, porque tiene el *fiat* que lo acredita como tal.

El mismo ciudadano está apto para el ejercicio de su profesion. Se dice que un escribano está apto, cuando no ha cometido ninguna falta ó delito, bien sea del orden comun, bien en lo relativo á su oficio, que lo haga indigno de la confianza pública y del honroso carácter que tiene y debe conservar ante la sociedad. Esta aptitud debe creerse mientras no conste lo contrario; y supuesto que no hay ninguna constancia que acredite en lo mas mínimo que el ciudadano Agustín Villa ha desmerecido la confianza pública desde que se le extendió el *fiat*; para lo cual comprobó debidamente tener la aptitud y conocimientos que exigen las leyes, debe creerse en tal aptitud. Luego el ciudadano Agustín Villa es escribano público, apto y espedido para el ejercicio de su profesion.

Examinemos ahora si al impedirle tal ejercicio se ha violado en él alguna de las garantías que otorga nuestra Constitucion. Dice esta en su artículo 4º: que todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que lo acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos: que ni uno ni otro se le podrá impedir sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad. El Promotor cree superfluo demostrar que la profesion de escribano es útil y honesta, que no ataca los derechos

de tercero ni ofende los de la sociedad, bastándole decir sobre este punto que en todos los países civilizados se ha considerado como muy noble y muy honrosa, y dado la mayor importancia á la profesion de escribano: que á éste, mediante ciertos requisitos, la sociedad lo ha investido con cierto carácter público para que intervenga en los contratos de los particulares y en el arreglo de sus últimas disposiciones, así como en las actuaciones judiciales. Ahora bien: cuando el hombre dedica algunos años de su vida, se afana y se desvela por adquirir los conocimientos necesarios que lo faciliten mas tarde obtener una profesion útil y honesta, y cuando al fin logra conseguirla despues de aquellos afanes y desvelos, se hace desde luego un lugar distinguido en la sociedad; y como las instituciones de todos los países no solo son la expresion de las necesidades políticas de los pueblos para que han sido dadas, sino que tienen tambien como uno de sus principales objetos, garantir y protejer en sus personas y en sus intereses á los individuos que forman dichos pueblos, al establecer la nuestra en su artículo 4º, que todo hombre es libre para abrazar cualquiera profesion útil y honesta, y para aprovecharse de sus productos, no ha hecho otra cosa que elevar á rango de ley uno de los principios inalterables del derecho natural que nos prescribe nuestra propia conservacion, y que como consecuencia precisa nos impelo á buscar los medios necesarios para conseguirla y para satisfacer nuestras necesidades. Y supuesto que la sociedad ha ennoblecido y honrado la profesion de escribano; supuesto que esta es útil, honesta y á ningun tercero perjudica; supuesto que la libertad de abrazarla y de aprovecharse de sus productos, está consagrada por el artículo 4º de nuestra constitucion; y supuesto, finalmente, que el ciudadano Agustín Villa la ha obtenido mediante los requisitos legales, sin haber llegado á desmerecer la confianza pública, querer impedirle su ejercicio, es hacer un ataque directo al derecho

cho natural, que como hombre tiene para buscar los medios de una subsistencia honrosa: es violar en él abiertamente la garantía que el mencionado artículo 4º le concede de acuerdo con el derecho natural. Que se le demuestre que ha cometido una falta ó delito que lo haga indigno de la confianza pública, y que así lo declare la autoridad judicial, única competente en la materia; pero mientras esto no se verifique, debe considerarse apto para el ejercicio de su profesion, y ninguna disposicion gubernativa puede impedirlo sin violar directamente aquella garantía. Si al zapatero, al carpintero, al herrero, por ejemplo, se les impidiera hacer zapatos, labrar la madera ó dar forma al fierro, evidentemente se les privaria de los medios naturales de subsistencia, medios que ellos han adoptado por ser útiles y honestos, y por cuyo motivo la Constitucion les garantiza su ejercicio y los faculta para aprovecharse de sus productos. Si se considera un arte mecánico ó una profesion literaria, solo en cuanto á la libertad de su ejercicio y aprovechamiento de sus productos, no hay ninguna diferencia; y la Constitucion lo mismo garantiza el libre trabajo del zapatero, del carpintero, del herrero, que el del abogado, del médico ó del escribano, porque uno y otro son útiles y honestos: querer impedir su ejercicio, es violar la garantía que sobre este punto otorga la Constitucion.

Vengamos ahora á la tercera cuestion; esto es, si al determinar el Ejecutivo del Estado que el ciudadano Agustin Villa no puede ejercer su profesion en toda su plenitud, ha tenido algun fundamento legal.

Se ve en el documento de fojas 2, que al contestarse por la secretaría de gobierno al recurso del ciudadano Villa, de 27 del próximo pasado Agosto, en que solicita la revocacion del acuerdo de 18 de Octubre del año anterior, en que se le dijo que conforme á las leyes vigentes solo podia ejercer como escribano actuario, se le dice nuevamente por acuerdo del ciudadano gobernador, que no es de accederse á su solicitud,

fundándose tal negativa en las leyes de 6 y 22 de Abril de 1861: que si esta providencia se resintiere de alguna inconstitucionalidad, como tiene por apoyo aquellas leyes, ellas serian las tachables, y que no es el gobierno la autoridad competente para declarar su constitucionalidad ó inconstitucionalidad: que con menos razon puede accederse á dicha solicitud, cuando se tiene á la vista el acuerdo de la honorable legislatura del Estado, del 5 de Agosto del expresado año anterior, y por el cual se resuelve: 1º que los escribanos no necesitan ninguna autorizacion para ejercer su profesion como actuarios, en los términos del artículo 31 de la ley de procedimientos vigente; y 2º que cuando se crea conveniente en el Estado la creacion de oficios públicos, independientes de los juzgados, se darán las autorizaciones correspondientes. Ocupémonos primero de las dos leyes que se citan en esta resolucion, dejando para despues el acuerdo de la legislatura.

Desde luego el promotor tiene el deber de manifestar que en seis de Abril de mil ochocientos sesenta y uno, no se dió en el Estado de México ninguna ley sobre escribanos ni sobre ninguna otra materia, y que al dar por existente tal ley la Secretaría de Gobierno, ha sufrido una equivocacion, sin duda involuntaria. En todo el mes referido, solo se dieron dos disposiciones una con fecha veintidos que es á la que se refiere la Secretaría, y otra posterior que se ocupó de reglamentar los juzgados del estado civil. La ley de veintidos citada, se dió por el Gobierno provisional del Estado de México, en virtud de facultades extraordinarias, y tuvo por objeto la creacion de un segundo juzgado de primera instancia en esta ciudad, pues antes de dicha ley existia uno solamente. La mencionada ley, por su artículo cuarto facultó á ambos jueces para tener protocolo y libro de hipotecas. Vino despues la ley de seis de Junio del mismo año, dada por el Congreso constituyente de aquel Estado. Esta ley ratificó la anterior, reformando el artículo cuar-

to citado, en estos términos: «tanto el juez 1º como el 2º, tendrán su protocolo, y el libro de hipotecas quedará á cargo del 1º»

No es necesario un grande esfuerzo de inteligencia para comprender que ni una ni otra ley atacaron la profesion de escribano ni prohibieron su ejercicio en el Estado. Si al expedirse aquellas, no habia en esta ciudad ningun escribano, pudo haberlo de un dia á otro, y entonces ningun inconveniente habria en que tal escribano ejerciera en competencia con los jueces, como sucede por ejemplo en el Estado de Sinaloa. Si las mencionadas leyes hubieran querido nulificar la profesion de escribano, habrian prohibido en lo absoluto el ejercicio de tal profesion; pero no lo han hecho ni podrian hacerlo, porque ni el gobernante de un Estado, con facultades extraordinarias, ni el Congreso constituyente del mismo, podrian abolir una profesion que se reconoce no solo como útil y honesta, sino como necesaria para el arreglo de los contratos de los particulares y sus últimas disposiciones. Los jueces solo actúan como escribanos, en defecto de éstos: y mientras las leyes generales no supriman tal profesion, esta debe subsistir, no obstante las facultades extraordinarias de un gobernante y las comunes de un Congreso constituyente. Que á tal ó cual escribano, indigno de la confianza pública, se le impida el ejercicio de su profesion, en buena hora; pero esto solo puede hacerlo la autoridad judicial, mediante un juicio previo y declarativo: la autoridad gubernativa no tiene hasta ahora tales facultades, porque aun no se expide la ley reglamentaria á que sobre este punto se refiere el artículo 4º de la Constitucion.

Así, pues, las leyes de 22 de Abril y 6 de Julio de 1861, no han querido ni podido establecer un monopolio de la profesion de escribano; porque los monopolios están absolutamente prohibidos por el artículo 28 de la Constitucion. Tampoco han querido ni podido crear un privilegio en favor de los jueces 1º y 2º de esta ciudad; porque segun el mismo artículo, los privilegios solo

deben concederse por tiempo limitado á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora; y conforme á los principios generales del derecho, para que un privilegio se entienda tal, debe así expresarse en el decreto de su creacion. Ademas, los privilegios son personalísimos, y la facultad de actuar como escribanos no se ha concedido á este ó aquel individuo, sino á los personales de los juzgados 1º y 2º de esta ciudad, sean quienes fueren. Y supuesto que las leyes de 22 de Abril y 6 de Julio citadas, ni han atacado la profesion de escribano, ni suprimido su ejercicio, ni establecido un monopolio, ni creado un privilegio, no cree el Promotor que hayan podido servir de fundamento para que se niegue al C. Villa la facultad de ejercer amplia y libremente su profesion de escribano.

Veamos ahora si el acuerdo de la II. legislatura del Estado, inserto en el documento de fojas 2, ha podido servir de fundamento para tal negativa. El Promotor desearia no examinar el dictámen de la comision de justicia que motivó dicho acuerdo; pero como en él se emiten varias ideas con las que no está conforme, y se vierten algunas especies que cree inexactas, se ocupará de dicho dictámen para impugnar aquellas ideas y destruir tales especies.

La comision, despues de adoptar la division que el Sr. Martinez de Castro, en su ley de 29 de Noviembre de 1867, hizo de los escribanos en actuarios y notarios, dice que no habiendo en el Estado, respecto de los segundos, ninguna disposicion propia que los haya organizado, se deben consultar las leyes del Gobierno general, conformes con la legislacion antigua sobre esta materia: que en ellas se establece que solo los escribanos públicos ó del número, ó los escribanos nacionales que tengan notaría, pueden autorizar escrituras en los lugares donde han sido inscritos; que por consiguiente, el simple título de escribano nacional, no confiere el derecho de abrir protocolo donde y como se quiera. Efectivamente, la materia de escribanos no está organizada ni re-

glamentada en el Estado; porque siendo este de nueva creacion, sus legisladores, ó no han tenido tiempo para ocuparse de dicha materia, ó no han querido introducir sobre este punto ninguna innovacion en las leyes generales; pero entre leyes generales y leyes especiales para el Distrito federal, hay gran diferencia. La comision quiere aplicar al Estado de Hidalgo la ley del Sr. Martinez de Castro, que como la misma lo dice, es orgánica de notarios y actuarios del *Distrito federal*. La comision no tuvo presente que, no habiendo en esta ciudad ni en todo el Estado, ni la vigésima parte de los escribanos que hay en la Capital de la República, no debe aplicarse aquí una ley que allí es una necesidad. La comision no tuvo presente que ese mismo gran número de escribanos, á quienes la ley orgánica facultó para ejercer como notarios, creó algunas dificultades: que para superarlas, fué preciso reformar el artículo 53 de la mencionada ley orgánica; y que el decreto de 5 de Octubre de 67 que hizo esta reforma, dijo en uno de sus considerandos: «Que habiéndose visto que al poner en ejecucion «la ley de 29 de Noviembre próximo pasado que las escribanías de gracia son tantas, que dejándolas abiertas resultaria no «haber número bastante de escribanos espedidos para ser actuarios, y se paralizaría «el despacho de los juzgados de lo civil con «grave perjuicio del público, etc.» Nada de esto consideró la comision y quiso aplicar á este Estado una ley privativa del Distrito federal ó hija de sus circunstancias particulares.

Dice la misma comision, que aunque todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo honesto que le acomode, los escribanos, por solo el hecho de serlo, no pueden abrir despacho público para autorizar los actos de los particulares, porque el precepto constitucional solo puede aplicarse á los escribanos como actuarios ó de diligencias, y de ninguna manera como notarios, porque siendo estos cargos de confianza pública, están bajo la depen-

dencia del Gobierno, del mismo modo que los jefes políticos, los jueces de letras, los encargados del Registro civil, etc.: y que así como el título de abogado no trae imbitito el derecho de abrir un juzgado para administrar justicia, el simple título de escribano no trae consigo el derecho de abrir una notaría. ¿En qué se funda la comision para decir que conforme al artículo constitucional los escribanos pueden solo ejercer como actuarios y no como notarios? Ninguna incompatibilidad hay entre uno y otro ejercicio: como prueba de esto, y supuesto que la comision quiere aplicará este Estado las leyes dadas especialmente para el Distrito federal, podrá citársele el decreto de 15 de Noviembre de 867, cuyo artículo 22 dice á la letra: «Los juzgados de Tlalpan, Tlal-nepantla, Cuautitlan, Zumpango, Otumba, Chalco y Texcoco, actuarán precisamente con escribanos nombrados por el «Ministerio de Justicia, que tendrán á su «cargo el protocolo del juzgado y el libro «de hipotecas, y extenderán todos cuantos «instrumentos se ofrezcan en el partido, «combrando los derechos de arancel, etc.» Así, pues, un Escribano puede desempeñar simultáneamente los cargos de actuario y notario.

Ninguna distincion hace el artículo constitucional sobre el modo de ejercer las profesiones; y donde la ley no distingue, no debemos distinguir. En consecuencia, es muy aventurado el juicio de la comision sobre que segun dicho artículo los escribanos pueden ejercer solo como actuarios y no como notarios. Ciertamente es que el cargo de Escribano es de confianza pública. Esta confianza, ó se refiere á sus conocimientos ó á su moralidad; y nadie que aspire á la profesion de Escribano puede obtenerla, sin que acredite tener los conocimientos necesarios y ser de buena conducta: lo primero se acredita con los exámenes que sufre el interesado, y con los certificados que presentare: lo segundo se comprueba con la informacion que se llama *de vita et moribus*; de suerte, que el que aspirando á la profe-

sion de Escribano, acreditarle ambas cosas, al expedírsele el título no se le hace ninguna gracia, y en el acto mismo de obtener dicho título, es ya acreedor á la confianza pública. No hay, por consiguiente, punto de comparacion entre un Escribano que ejerce libremente su profesion, y un jefe político, un juez de letras ó un encargado de Registro civil. Estos son unos empleados por gracia del Gobierno que los nombra, y disfrutan sueldo fijo: el Escribano no es un empleado, ni se le hizo gracia al expedirle el título, ni disfruta ningún sueldo, sino que se reduce á cobrar los derechos de arancel, conforme á sus trabajos.

Tampoco hay punto de comparacion en lo que dice la comision de la legislatura, sobre que así como el título de abogado no trae imbitito el derecho de abrir un juzgado para administrar justicia, el simple título de Escribano no trae consigo el derecho de abrir una notaría. Al Abogado no se autoriza para ser juez desde que se le expide el título: tendrá mas tarde tal investidura, si reúne las condiciones necesarias para administrar justicia: el título no le da jurisdiccion, pues esta dimana del nombramiento que tenga para desempeñar tal ó cual juzgado, y de la toma de posesion mediante estos ó aquellos requisitos; pero el Escribano, desde el acto mismo que obtiene el título está apto para autorizar los contratos de los particulares, y para ejercer su profesion en toda su plenitud. De otra suerte serian enteramente inútiles y sin ningún sentido ni valor aquellas frases que se emplean en todos los títulos de los escribanos: «Por tanto, mando á quienes corresponda tengan por tal Escribano á N. N., quien en virtud de este *Plat*, puede ejercer libremente su profesion, usando de tal ó cual signo en los documentos que autorice, etc.» Al Abogado no se le dice en su título que puede desde luego ser juez, ni este cargo está anexo á aquella profesion, y de hecho, hay multitud de abogados que jamás han ejercido una judicatura; pero la facultad de autorizar los contratos de los particulares,

sí es anexa á la profesion de Escribano, porque tal es el objeto de su institucion, segun las leyes del título 19, part. 2.<sup>a</sup>

Solo en el Distrito federal está dividida la profesion mencionada, en notarios y actuarios; pero el promotor insiste en que no son aplicables á este Estado las leyes privativas de aquel Distrito, y en que no estando organizada ni reglamentada en el Estado dicha profesion, debemos atenernos á las leyes antiguas.

Dice por último la comision de justicia, que los protocolos en el Estado son particulares ó del Gobierno: que en los puntos en que aquellos están agregados á los juzgados de letras, sus productos son rentas del Estado, que se emplean para cubrir los sueldos de los jueces; y que autorizar á un Escribano para abrir un oficio público, seria privar al Estado de una de sus rentas, ó disminuirla considerablemente con perjuicio de los sueldos asignados á dichos jueces.

Todo esto es enteramente inexacto. En primer lugar, el Gobierno del Estado, ni tiene ni se ha reservado ninguna propiedad en los protocolos, y desde que el mismo Estado es soberano é independiente, no ha llegado á ocuparse una sola vez de legislar sobre protocolos. En segundo lugar, los productos de los protocolos, ni se consideran ni se han considerado nunca como rentas del Estado. Ninguna ley se ha expedido hasta ahora, que se ocupe de clasificar las rentas públicas en el mismo Estado, y por consecuencia, malamente puede decirse que el producto de los protocolos forma parte de unas rentas que no han llegado á clasificarse. Y si no, ¿en dónde está la ley de ingresos? Por mas que se busque no podrá encontrarse, porque dicha ley no se ha expedido desde que el Estado es independiente; y es muy de notarse, que la comision de justicia haya dicho que los productos de los protocolos forman parte de las rentas del Estado, cuando debia saber que no hay ninguna ley que las clasifique. En tercer lugar, y este es acaso el punto mas interesante, es del todo inexacto que en los lu-



gares en que los protocolos están agregados á los juzgados de letras, sus productos se empleen para cubrir los sueldos de los jueces. El promotor no tiene necesidad de entrar en una larga demostracion respecto de aquella inexactitud, y solo le bastará citar el decreto número 21 de la legislatura del Estado, expedido en 9 de Octubre del año anterior, y sancionado por el gobierno en 11 del mismo mes. Este decreto se ocupa del presupuesto para el año fiscal de 69 á 70, y despues de señalar los sueldos correspondientes á todos los funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, se ocupa del judicial. Hecha la asignacion para el Superior tribunal de justicia, llega á los demás funcionarios de este ramo y dice en una de sus partidas:

Jueces de primera instancia.

Tres jueces de primera instancia, dos de Pachuca y uno de Tulancingo, á \$2,400 \$7,200

Si estos jueces no están suficientemente pagados con \$200 mensuales cada uno, ignora el Promotor qué mejor sueldo podría asignárseles, puesto que lo disfrutaban igual á los ministros del tribunal de justicia. Nada se dice, ni en aquel decreto ni en ningun otro, sobre que dichos sueldos se sacarán de los productos de los protocolos, y si se ocurre á la Tesorería general del Estado, se verá que de las rentas de este se cubren aquellos sueldos sin que tales productos hayan ingresado jamas á dicha oficina, sino que los jueces 1º y 2º de esta capital, los aprovechan única y exclusivamente, ademas del sueldo de \$200 mensuales que á cada uno de dichos jueces les están señalados en el presupuesto. En consecuencia, si los productos de los protocolos se han querido ceder á los jueces como una gracia ó como un sobresueldo, es una cuestion distinta; pero que no venga diciendo la comision de justicia que tales productos están destinados para el pago de sus sueldos, porque esto no es cierto.

Como resultado de los fundamentos que tuvo esta comision al emitir su dictámen,

concluyó la misma con las dos proposiciones de que antes se ha hecho mérito, y que constan en el documento de fojas 2, las cuales fueron aprobadas por la legislatura. Pero tales proposiciones envuelven una violacion directa del artículo 4º de la constitucion, puesto que no permiten el libre ejercicio de la profesion del Escribano. Y dando por sentado que al acordar la legislatura de conformidad con aquellas proposiciones, y que tal acuerdo tuviera fuerza de ley, no debería subsistir, atento el artículo 126 de la Constitucion federal, que dice á la letra: "Esta constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanan de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el presidente de la República con aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union." "Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados."

Antes de concluir este dictámen, el Promotor cree necesario manifestar, que en ninguno de los ocursos que el ciudadano Agustin Villa ha elevado ante el gobierno del Estado, ha pretendido que se quiten á los jueces de esta capital los protocolos que tienen, y que lo que únicamente pretende es, que se le deje ejercer libremente su profesion y no solamente como actuario.

Resumiendo todo lo expuesto, resulta:

Que el ciudadano Agustin Villa es Escribano público legalmente autorizado y apto para ejercer como tal.

Que al impedírsele el libre ejercicio de su profesion por el ejecutivo del Estado, se ha violado en él la garantía que le otorga el artículo 4º de la Constitucion federal.

Que aquella autoridad, ni tiene ni ha tenido ninguna razon legal para impedirle dicho ejercicio.

Que en consecuencia, procede á su favor el recurso de amparo intentado por tal motivo.

En cuya virtud, y con fundamento del

mencionado artículo 4º, el Promotor concluye con la siguiente proposición, que somete á la aprobación de ese juzgado: La justicia federal ampara y protege al ciudadano Agustín Villa contra la providencia del Gobierno de este Estado, que le impide el libre ejercicio de su profesión de Escribano público.—Pachuca, Octubre tres de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Rafael Villagas.*

*Sentencia del Juez de Distrito en el amparo á que se refiere el pedimento anterior.*

Pachuca, Octubre diez y nueve de mil ochocientos setenta.—Visto el juicio de amparo promovido por el ciudadano Agustín Villa contra el acuerdo del ciudadano Gobernador del Estado de Hidalgo, por el que se declara que dicho ciudadano Villa solo puede ejercer el oficio de escribano actuario, y se le niega hacerlo como notario; por cuya resolución cree Villa que se ha violado en su persona la garantía otorgada en el artículo 4º de la Constitución federal, en virtud de la cual los ciudadanos pueden abrazar libremente la profesión ó industria que les acomode. Visto el informe rendido por el ciudadano Gobernador, el pedimento fiscal y todo lo demás que consta, se tuvo presente y ver convino; Considerando que para resolver si se ha violado la garantía del artículo 4º de la Constitución, se debe investigar si el derecho de tener oficio público de notaría está comprendido en la profesión, industria ó trabajo de que trata este artículo, y por lo mismo si el Gobierno del Estado ha violado ó no la indicada garantía por sus resoluciones de 18 de Octubre de 1867, y 3 de Setiembre del presente año, en las cuales se previene que conforme á las leyes vigentes en este Estado, el ciudadano Agustín Villa puede ejercer como escribano actuario y no como notario, fundándose en las leyes de 22 de Abril y 6 de Julio de 1862, y en el acuerdo de la legislatura del mismo Estado de 5

de Agosto de 69, en el que se determina que ninguna autorización necesitan los escribanos para ejercer su profesión como actuarios en los términos del artículo 31 de la ley de procedimientos vigente en el mismo; pero que cuando se crea conveniente la creación de oficios públicos independientes de los juzgados de primera instancia, se darán las autorizaciones correspondientes. Considerando que las notarías son cargos públicos dependientes directamente del Gobierno, bien sea el general ó el de los Estados, los cuales tienen plena libertad para crear los oficios públicos de notaría, cuando lo juzguen conveniente, así como para nombrar las personas que deban servirlo, (Sala, Ilustración del derecho real de España, lib. 3º; título 4º, párrafo 5º, ley 1ª y la glosa, y 3ª, tít. 19, partida 3ª), y cuyo derecho no solo ha sido reconocido en el tiempo en que se dieron estas leyes, sino con posterioridad á la Constitución de 1857, como se ve en la ley de 5 de Diciembre de 1867, expedida por el Gobierno general, en la que expresamente se dice: que la Nación siempre ha conservado el dominio directo en los oficios públicos, por cuya razón no tiene inconveniente legal para suprimirlos, y aun cuando esta ley fué dada para el Distrito, su razón comprende al caso de que se trata. Considerando: que tanto por este motivo, como por las funciones que ejercen los notarios, y por el requisito de su nombramiento, las notarías son verdaderos cargos y empleos públicos, y no pueden, por lo mismo, estar comprendidos entre las profesiones, industria ó trabajo de que trata el artículo citado de la Constitución federal: que siendo tales cargos públicos, los Estados, en virtud de su soberanía, están en libertad de conferirlos, bien á los escribanos públicos ó ya á los jueces letrados, como lo disponen las leyes en que se apoya el Gobierno de este Estado, para negar al ciudadano Villa el derecho que cree tener de abrir oficio público de notaría, por el solo hecho de ser Escribano: que estando por lo expuesto, y según el acuerdo de la Legislatura, á car-



go de los jueces de primera instancia el oficio público de notario, ningún otro puede ejercer el mismo oficio, conforme á la ley 7ª, tít. 23, libro 10 N. R.: Considerando, por último, que el Gobierno del Estado no ha impedido al ciudadano Agustín Villa ejercer la profesion de Escribano, sino únicamente el que ponga despacho de notario, por no estar inscrito como tal en esta ciudad, lo que en manera alguna importa una violacion de garantías. Con arreglo á lo expuesto, á las doctrinas y leyes citadas, y á lo que previenen los artículos 13 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, debia de fallar y fallo: 1º La justicia de la Union no ampara al ciudadano Agustín Villa, por no haberse violado en su persona la garantía que otorga el artículo 4º de la Constitucion federal. 2º Publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Supremo Gobierno, y en el de este Estado, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando, lo mandó y firmó el ciudadano Lic. Félix Vergara Lope, juez suplente de Distrito.

Doy fé.—Firmado.—*F. Vergara Lope.*  
—*F. Villaseñor.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia en Tribunal pleno.*

México, Enero tres de mil ochocientos setenta y uno.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Hidalgo, por el ciudadano Agustín Villa, quejándose de que, despues de haberle expedido el gobierno del Estado, con fecha 19 de Junio de 1869, el título de escribano público y nacional, y quedando por lo mismo autorizado para ejercer con tal carácter, luego por un acuerdo del referido gobierno, fecha 18 de Octubre del citado año de 69, se le negó la libertad de hacerlo: que á pesar del ocurso que con aquel motivo presentó al Ejecutivo en 27

de Agosto próximo pasado, se ordenó por esa autoridad en 3 de Setiembre, que no era de accederse á lo pedido por Villa, deduciendo de todo esto, el promovente, que los referidos acuerdos violan en su persona la garantía consignada en el artículo 4º de la Constitucion federal, al garantizar la libertad del hombre, para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode, siempre que se observen las limitaciones que en este artículo se marcan. Visto el informe con justificación de que habla la ley, lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal, la sentencia del inferior pronunciada en 19 de Octubre anterior, y la que en su parte resolutive declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Agustín Villa, por no haberse violado en su persona la garantía que invoca; con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando, que la legislatura del Estado de Hidalgo, en uso de sus facultades constitucionales pudo, como lo hizo en el primer artículo transitorio de su Constitucion, declarar vigentes las leyes expedidas en el Estado de México, mientras se ocupaba de organizarse en los momentos de su creccion, entre cuyas leyes se encuentran las de 22 de Abril y 6 de Julio de 1862: que con los mismos fundamentos pudo dictar su acuerdo de 5 de Agosto de 1869, reducido todo á que los escribanos no necesitan autorizacion para ejercer como actuarios, en los términos del artículo 31 de la ley de procedimientos, vigente en el referido Estado de Hidalgo: Considerando {que esas disposiciones adoptan la division de escribanos en actuarios y notarios; clasificacion que demanda el régimen administrativo de dicho Estado, segun se infiere de las mismas constancias del expediente; y reconocido como está que ambas funciones son incompatibles en una misma persona, y que por lo mismo no pueden ejercerse simultáneamente: Considerando que por nuestra legislacion la nacion y los Estados han conservado siempre la inspeccion y el derecho de arreglar el ejercicio de los oficios públicos: Considerando

que este derecho se deriva de la naturaleza misma del oficio de escribano, que siendo de confianza pública, su carácter es propio de la autoridad suprema, y por tal motivo corresponde á sola ella la creacion de esos funcionarios: Considerando que los títulos profesionales solo dan aptitud ó capacidad legal para ejercer ciertas profesiones, pero sin coartar por esto la facultad del legislador para reglamentar su ejercicio ó manera de desempeñarlas: Que en el presente caso no hay una buena aplicacion de la garantía invocada por el quejoso; porque si bien es cierto que el artículo 4º de la Constitución federal de la República previene que: «todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que lo acomode:» esta profesion se entiende de las privadas, mas no de aquellas que tienen un carácter absolutamente público, como la de escribano; y que por lo mismo al que la ejerce, mas bien que llamarle profesor de tal ó cual ciencia, se le designa con el nombre de funcionario público: Considerando, por último, que respecto del ciudadano gobernador del Estado de Hidalgo, al no acceder á la pretension del ciudadano Agustin Villa, no hizo mas que acatar la disposicion del artículo 62, fraccion primera de la Constitución particular del propio Estado, y la que impone á dicha autoridad, entre otras, la obligacion de cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Estado. Por tales fundamentos, y por los propios legales en que se apoya la del juez de Distrito, se declara: que es de confirmarse y se confirma la dicha sentencia, y por lo mismo queda resuelto: 1º que la justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Agustin Villa, por no haberse violado en su persona la garantía que invoca contra la providencia á que este juicio se refiere. 2º Que se devuelvan sus actuaciones al juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes. Publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos presidente y ministros que forman el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron (Firmados).—*Pedro Oyazon.*—*J. J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Juan A. Mateos*, secretario.

Son copias. México, Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

#### AMPARO.

*Juicio de amparo promovido ante el juzgado 2º de Distrito de esta capital, por Bartolo Romero, por violacion de las garantías individuales que otorgan los artículos 16, 17 y 19 de la Constitución federal.*

#### PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano juez:

El Promotor dice: que explicada la naturaleza del caso con los informes que ha rendido el ciudadano Gobernador del Distrito, resultan enteramente falsos los hechos en que se apoya el quejoso para interponer el recurso de amparo, puesto que la disposicion de la autoridad no importa un acto arbitrario traslimitando sus facultades, sino el ejercicio natural de las que la ley le confiere. Como en el informe del ciudadano Gobernador están extensamente detalladas las circunstancias del caso, se palpa á primera vista que no se han violado las garantías individuales que otorgan los artículos de la Constitución á que se refiere el quejoso, y por lo mismo no es necesario el que suscribo, demostrar con dilatados ra-